

INFOEVENTO

Promoción de empresas socialmente responsables en países en desarrollo

El potencial y las limitaciones de las iniciativas voluntarias

Informe del taller organizado por UNRISD
Ginebra, los 23 y 24 de octubre de 2000

Este documento es la traducción al español de la publicación de UNRISD *Promoting Socially Responsible Business in Developing Countries: The Potential and Limits of Voluntary Initiatives* (Conference News, UNRISD/CN/02/1, January 2002). La versión en español no es una publicación formal de UNRISD.

Contenido

Regulación internacional de las Empresas Multinacionales (EMs)

Códigos y certificación

Programas diferentes

Limitaciones a la legislación

Aplicación endeble

Vigilancia y verificación

El papel de los sindicatos

Aclaración de términos e iniciativas

Países en desarrollo

¿Qué es lo que conduce hacia la responsabilidad?

¿Un “entorno incapacitante”?

¿Relevancia para el Sur?

Acrónimos

Programa

Participantes

Muchas de las grandes empresas consideran que ya están adoptando medidas significativas para mejorar su desempeño social y ambiental a través de “iniciativas voluntarias” (IVs) tales como códigos de conducta, certificación, informes, auditorías sociales, esquemas de intercambio comercial justo y programas de inversión social de las propias empresas.¹ Diversos factores y presiones permiten explicar el interés que se ha suscitado recientemente en las empresas por los problemas sociales y del medio ambiente. Dichos factores son, por ejemplo: la marea de presiones provenientes de innumerables organizaciones de la sociedad civil; las oportunidades que ofrece el mercado relacionadas

¹ El término **iniciativas voluntarias** abarca una gama amplia de medidas cuyo objetivo es mejorar el desempeño social y ambiental. Con las IVs se tiende a ir más allá de las leyes y la legislación actual relacionadas con la protección social y ambiental pero también pueden servir como una alternativa a la legislación. Pueden ser desarrolladas unilateralmente por parte de las empresas y la industria o ser diseñadas y aplicadas por parte de diversos participantes, incluyéndose las instituciones multilaterales, los gobiernos, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales (ONGs).

con “tecnologías verdes” y con los “consumidores con ética”; la posibilidad de obtener alguna ventaja sobre sus competidores al proyectar una imagen de responsabilidad; y el reconocimiento cada vez mayor por parte de empresas, gobierno y sociedad civil de que la libertad y el poder crecientes de las empresas multinacionales (EMs) deben ir acompañados de un mayor sentido de responsabilidad. Hay señales de cambio no solamente en las actitudes de las grandes corporaciones hacia los problemas sociales y del medio ambiente, sino también en los enfoques de las políticas para abordarlos, que se supone van a elevar las normas y reducir las repercusiones negativas. En muchos países, la función reguladora de los gobiernos parece haber cedido terreno a los enfoques voluntarios. Según estos últimos, las empresas o las asociaciones industriales deciden unilateralmente sobre metas, ejecución, vigilancia y elaboración de informes, o se ofrecen de manera voluntaria para participar en esquemas diseñados total o parcialmente (y vigilados tal vez) por el gobierno, las organizaciones internacionales y las de la sociedad civil.

Hay un gran debate acerca del potencial y las limitaciones de las iniciativas voluntarias para mejorar el desempeño en el ámbito social y ambiental y, en particular, acerca de su papel y efectividad en los países en desarrollo. En la investigación que se está llevando a cabo por parte del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), como parte del proyecto denominado Responsabilidad empresarial para el desarrollo sostenible, se trata de responder a las siguientes preguntas:

- Las empresas afirman estar promoviendo negocios con sentido de responsabilidad social y ambiental a través de las iniciativas voluntarias. ¿En qué medida concuerdan sus afirmaciones con lo que sucede en realidad?
- ¿Se puede considerar a las IVs como una opción efectiva a la regulación obligatoria?
- ¿Bajo qué condiciones y circunstancias pueden las IVs mejorar significativamente el desempeño social y ambiental de las empresas ?
- ¿Cuán efectivos son los intentos de las grandes empresas multinacionales y de las empresas de comercio pequeñas para mejorar el desempeño social y ambiental de sus afiliados y **¿proveedores** en países en desarrollo?
- ¿Es realista o justo esperar que, dado su nivel de desarrollo económico e institucional, los países en desarrollo se comprometan plenamente con el programa de responsabilidad empresarial?

Al inicio de esta investigación, UNRISD organizó un taller para someter a consideración esas preguntas, discutir las versiones preliminares de los documentos sobre problemas y países seleccionados, y establecer las bases para realizar investigaciones más a fondo y sistemáticas en determinados países en desarrollo.² Al seminario asistieron cerca de 30 representantes de empresas y de asociaciones patronales, de sindicatos, de ONGs, de organismos de las Naciones Unidas y de la comunidad académica y de investigación (véase la página 46). El apoyo financiero provino de la Fundación MacArthur.

² En los días en que se realizó este taller, UNRISD estaba preparando una propuesta de investigación para el Concurso sobre Investigación Colaborativa Internacional, convocado por la Fundación MacArthur. Un componente fundamental del proyecto propuesto consistió en investigar el potencial y las limitaciones de las IVs en las Filipinas, México y Sudáfrica. El financiamiento del proyecto fue aprobado por la Fundación MacArthur a finales del año 2000.

La reunión quedó estructurada en torno a tres sesiones principales (véase la página 44. En la primera, tres participantes presentaron ponencias en las cuales se examinaron problemas de regulación de las firmas internacionales, de los códigos de conducta y de los esquemas de certificación. Enseguida se presentaron dos ponencias en las que se examinaron la experiencia en la promoción de la responsabilidad empresarial en el ámbito social y ambiental en Indonesia, Singapur y Malasia. En la sesión final se sometió a consideración el futuro programa de investigación de UNRISD sobre la responsabilidad empresarial en países en desarrollo. Los investigadores procedentes de Filipinas, México y Sudáfrica, quienes realizaron estudios a fondo durante los años 2001 y 2002, presentaron evaluaciones preliminares sobre la responsabilidad empresarial en sus respectivos países.

Regulación internacional de las EMs

En la primera sesión del seminario se examinó uno de los tópicos más controvertidos en el campo del desarrollo económico: la regulación de las empresas internacionales. ¿Deberían las instituciones multilaterales jugar un papel en la regulación de las empresas internacionales? En caso afirmativo ¿Deberían estas regulaciones ser obligatorias o no ?

En su ponencia, E.V.K. FitzGerald consideró que dadas las limitaciones inherentes tanto a las IVs como a la legislación local, se requiere que haya un marco de referencia multilateral para la regulación.³ Las iniciativas voluntarias en general, así como los códigos de conducta en particular, carecen de un elemento de obligatoriedad que asegure su cumplimiento por parte de todas las empresas y de castigos aceptables por violación de las normas. No obstante que la pérdida efectiva o potencial de valores activos y de ventas puede obligar a algunas empresas a adoptar medidas para mejorar su desempeño social y ambiental, esto es especialmente importante pero sólo para compañías cuyas marcas tienen una imagen significativa y que cuentan con una base amplia de consumidores en países como los Estados Unidos de América o los países de Europa; por lo tanto, no se puede utilizar como un principio generalizado para todos. Más aún, las presiones que ejercen los consumidores en las economías de mercado del Norte son sumamente variables e inconsistentes entre países y entre sectores. La alternativa a las IVs y a la normatividad internacional, que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es la legislación nacional, sería requerir que las empresas multinacionales respeten determinadas normas cuando operan en el exterior. Pero dicha alternativa falla por tres razones: podría dar como resultado una legislación diferente en cada uno de los países de la OCDE y por lo tanto, una diversidad de normas; las EMs podrían eludir dicha legislación trasladando su matriz fuera de los países; y, aparentemente, no hay razón para aplicar normas estrictas a las firmas afiliadas o asociadas a las empresas multinacionales en los países en desarrollo, si no se les aplica también a las grandes empresas matrices en sus países de origen.

En la práctica, el desarrollo de un marco de referencia multilateral ha sido lento y errático. Se han dado algunos pasos (o se está considerando darlos) en los campos de la inversión, la fiscalización y la competencia; pero no ha habido intentos serios para desarrollar un régimen que armonice los derechos de propiedad con las obligaciones relacionadas con asuntos laborales y ambientales. Si, como es probable, se van a fortalecer los derechos de propiedad a través de la Organización Mundial de Comercio (OMC); entonces debería

³ Para una versión revisada de esta ponencia en inglés, véase E.V.K. FitzGerald: **Regulating Large International Firms**, PP TBS 5, UNRISD, Ginebra 2001.

hacerse lo mismo con las “obligaciones de los propietarios”. No sólo debería haber un “contrato social mundial” más equilibrado, sino que dicho contrato debe ser especialmente susceptible a las necesidades de los países en desarrollo. El sistema normativo que está siendo elaborado por los países de la OCDE todavía no ha sido ampliado para abarcar a los países en desarrollo con el fin de apoyarlos. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de definir, desde el punto de vista de los países de ingreso medio y de ingreso bajo, lo que sería un régimen normativo deseable. La iniciativa de la Unión Europea para incluir la inversión en la “Ronda del Milenio” de la OMC con una “dimensión de desarrollo” explícita, implica una oportunidad valiosa para definir lo que es un contrato social mundial. Sin embargo, el paso lógico de establecer empresas multinacionales como entidades jurídicas sujetas al derecho internacional, tiene todavía un largo camino por delante a pesar de la realidad institucional de la economía mundial.

Algunos de los participantes estuvieron de acuerdo en que si el derecho internacional está otorgándoles derechos adicionales a las empresas, necesita imponerles también determinadas obligaciones. El avance en este campo ha sido lento pero no ha cesado. Las EMs ya están reconocidas en alguna medida por el derecho internacional. Esto es lo que se advierte, por ejemplo, en el área de la corrupción, donde los tratados internacionales fijan determinadas obligaciones a las empresas. Existen también normas de derecho internacional consuetudinario relacionadas con los derechos humanos. Se señaló que determinados convenios sobre derechos humanos contienen algunos deberes pero, en cierto sentido, se han quedado rezagados. Dichos convenios se aplican a todas las entidades, ya sean individuos, gobiernos o empresas. Aunque los códigos internacionales de conducta son voluntarios, representan en efecto, valores provenientes del derecho internacional consuetudinario. Más aún, los códigos intergubernamentales relacionados con la comercialización de productos específicos, tales como pesticidas y substitutos de leche materna, también han adquirido la condición de derecho internacional consuetudinario.

Códigos de conducta y esquemas de certificación

A continuación, dos de los ponentes examinaron la efectividad de los códigos de conducta y de los esquemas de certificación en la promoción de empresas responsables en el ámbito social y ambiental. Leah Margulis examinó la experiencia en la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Substitutos de la Leche Materna, acordado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1981, así como del Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y Uso de Plaguicidas adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1985. Cuatro puntos claves surgieron de esta presentación: Primero, dichos códigos han tenido resultados sumamente contradictorios. Por un lado, contienen varios puntos débiles relacionados, por ejemplo, con estipulaciones específicas; como sucedió en el fracaso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecer una entidad internacional de inspección así como en la escasa o nula aplicación de los códigos en determinados países. Por otro lado, las grandes empresas productoras de leche en polvo para bebés y de pesticidas han tenido que cambiar determinados procedimientos, en tanto que algunos países han aprobado una legislación nacional amplia en relación con los códigos.

En segundo lugar, mientras que las IVs son ubicadas a menudo en el extremo opuesto del espectro normativo de la legislación obligatoria, resulta conceptualmente confuso establecer esa distinción tan marcada. Por ejemplo, los códigos intergubernamentales

mencionados anteriormente, siendo formalmente “voluntarios”, de hecho son parte de un proceso de normatividad y tienen una condición muy diferente a la de los códigos de conducta establecidos de manera unilateral por empresas específicas. Esto se debe a lo siguiente: (a) se les establece a través de un proceso intergubernamental y por lo tanto tienen la misma condición legal de atenuación (o “blandura”) que tienen los acuerdos internacionales, tales como la Declaración de Derechos Humanos; y, (b) se espera que los gobiernos nacionales incorporen una parte o todo el contenido de los códigos intergubernamentales en la legislación nacional. En relación con el código de comercialización de substitutos de leche materna, por ejemplo, 22 países adoptaron todas las estipulaciones del código, 37 países adoptaron la mayoría o algunas de dichas estipulaciones, y otros 18 países redactaron leyes que están en espera de su aprobación definitiva.

En tercer lugar, esas iniciativas no son estáticas sino que evolucionan. Por ejemplo, el código de la OMS ha sido reforzado en las últimas dos décadas por medio de tres enmiendas. El código de la FAO está siendo revisado actualmente a fin de tomar en cuenta el Convenio sobre Consentimiento Informado Previo de Rotterdam de 1998; así como la preocupación de la sociedad civil y de la comunidad científica en relación con asuntos tales como el principio de precaución, el manejo integrado de las plagas, las responsabilidades de las empresas procesadoras de alimentos y las distribuidoras al menudeo, el reciclamiento de contenedores, y la necesidad de que las empresas divulguen más sus actividades.

Cuarto, el factor clave que impulsó dichas iniciativas y los intentos subsiguientes para fortalecerlas es la movilización de la sociedad civil y, fundamentalmente, las alianzas de las ONGs del Sur con las del Norte. Ambos códigos, el de la OMS y el de la FAO, surgieron en respuesta a las campañas de las ONGs. Ese tipo de presiones se ha mantenido mediante las redes de ONG (específicamente la Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil y la Red de Acción en Plaguicidas), que involucran a organizaciones del Norte y del Sur en numerosos países. Estas redes no sólo han ejercido una presión considerable a nivel internacional mediante la divulgación amplia de los abusos, los boicots por parte de los consumidores y la participación en procesos de consulta, sino que también se ha promovido la legislación, los mecanismos de vigilancia, y la capacitación relacionada con problemas de salud y vigilancia a nivel local y nacional.

En esta presentación se hizo referencia también a la función y efectividad de la certificación y de los esquemas de comercio equitativo relacionados con productos textiles, agrícolas, forestales y piscícolas. Los códigos de conducta y los esquemas de certificación no deberían ser vistos como una alternativa a las estrategias que implican convenciones intergubernamentales, legislación, demandas legales, boicots, actividades de los accionistas, campañas de apoyo, y campañas pro derechos de los trabajadores; sino como complementos de esas estrategias. No obstante que algunas de las certificaciones agrícolas y los esquemas de comercio equitativo se concentraron originalmente en los agricultores y en las empresas pequeñas, están extendiéndose cada vez más a las actividades y cadenas de oferta de las EMs y de los grandes comerciantes al por menor de países del Norte. En relación con el diseño, aplicación y repercusiones de dichos esquemas, especialmente en países en desarrollo, han surgido varias preocupaciones. Por ejemplo, la influencia excesiva de los intereses de las corporaciones en el diseño y financiamiento de determinados esquemas; los altos costos de la certificación; la dependencia de certificadores foráneos y de grandes despachos contables en vez de los

inspectores y expertos locales; sistemas de vigilancia endeble y de arriba hacia abajo; inadecuados planes de manejo forestal; y en determinados esquemas, la marginación de los sindicatos y el soslayamiento de asuntos relacionados con los derechos laborales.

Rhys Jenkins presentó una ponencia en la que analizó la historia y la proliferación reciente de los códigos de conducta de las corporaciones, así como sus beneficios y limitaciones.⁴ Se identificaron cinco tipos de códigos: el de las empresas (como Reebok o Levi's); el de los negocios o asociaciones industriales (como el que se denomina "Atención responsable" de la industria química);⁵ el de las múltiples partes interesadas (como SA 8000);⁶ el código modelo (como el denominado "Principios globales" del *Interfaith Center on Corporate Responsibility* [Centro Inter Fé sobre Responsabilidad Corporativa]; y las pautas intergubernamentales (como las de la Declaración Tripartita de Principios Concernientes a las Empresas Multinacionales y Políticas sociales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las de la OCDE para Empresas Multinacionales). En esta ponencia se identificaron las diversas partes interesadas y las fuerzas que están promoviendo códigos, y se destacaron en especial las presiones ejercidas por accionistas, ONGs y sindicatos, así como los intentos de las grandes corporaciones para controlar las cadenas mundiales de abasto y las prácticas de sus filiales y abastecedores en torno a lo social y al medio ambiente. En un contexto donde las marcas y la preocupación por la reputación de la empresa y de sus productos están adquiriendo mayor significación, muchas de las corporaciones son susceptibles a la publicidad negativa y ven a los códigos de conducta como un medio para reducir esos riesgos. Los códigos varían considerablemente en términos de su alcance y efectividad para fortalecer las normas sociales y ambientales. Están sujetos a numerosas limitaciones: en su elaboración o en su aplicación frecuentemente se ignoran problemas claves (como el del soborno), o derechos laborales (tales como el de la libertad de asociación y de negociación colectiva). A menudo, la aplicación es endeble; muchos de ellos no contienen ninguna provisión para vigilar su implantación y tienden a constreñirse a determinados sectores (por ejemplo, el del vestido, el de la juguetería y el de la ropa deportiva) en los cuales la imagen corporativa es importante y en torno a ellos se hayan organizado campañas de la sociedad civil. Se suscitaron también preocupaciones porque los códigos de conducta pueden, en primer lugar, desviar la atención sobre la necesidad de una regulación gubernamental; en segundo lugar, pueden marginar el papel de los sindicatos en la solución de problemas laborales; y además, a menudo concentrarse en problemas que los consumidores y las ONGs del Norte consideran importantes pero que no necesariamente constituyen una preocupación primordial para los grupos de interés de los países en desarrollo. Muchas veces la calidad de los códigos depende de los tipos de las partes interesadas que estén involucradas en su diseño, aplicación y vigilancia. Los códigos que son elaborados unilateralmente por empresas o asociaciones mercantiles con frecuencia son más blandos que aquellos que involucran a múltiples partes interesadas. Es importante desarrollar estrategias para

⁴ Para una versión revisada de esta ponencia en inglés, véase Rhys Jenkins: **Corporate Codes of Conduct: Self-Regulation in a Global Economy**, PP TBS 2, UNRISD, Ginebra 2001.

⁵ "Atención responsable" se inició en Canadá en respuesta al desastre ocurrido en Bhopal en 1984, y ha evolucionado como una iniciativa de la industria química en todo el mundo. En él se compromete a las empresas miembros a realizar un mejoramiento continuo en los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente y a la apertura en cuanto a informar de sus actividades y sus logros.

⁶ SA 8000 (*Social Accountability 8000*; en español: Responsabilidad social 8000) es un código de conducta relacionado con normas laborales, y un programa de verificación y certificación para las fábricas en diversos sectores en todo el mundo.

asegurarse de que los códigos sean complementarios a la legislación gubernamental y que proporcionen un espacio para que los trabajadores se organicen. Los códigos de conducta deberían ser vistos como un campo de impugnación política y no como una solución a los problemas generados por la mundialización de la actividad económica.

En los debates que se suscitaron con la presentación de estas ponencias se plantearon problemas importantes relacionados con las motivaciones, el diseño, la aplicación y la vigilancia en torno a los códigos y los esquemas de certificación.

Identificar los diferentes programas

Dada la proliferación de diferentes tipos de códigos y esquemas de certificación, es difícil generalizar acerca de sus efectos en términos de promoción de responsabilidad social y ambiental de las empresas. Estas iniciativas reflejan intereses y programas diferentes. Por lo tanto, al evaluar la función y repercusión de los códigos es importante considerar cuidadosamente la razón de que haya surgido un determinado código, así como identificar los intereses predominantes involucrados en su diseño. Por lo tanto, es crucial estar conscientes del contexto, la historia y los procesos políticos relacionados con los códigos de conducta.

En cuanto a las motivaciones que subyacen en los códigos, se expresaron diversos puntos de vista. Varios de los participantes consideraron a los códigos esencialmente como una respuesta a las presiones de la sociedad civil. Otros insistieron en la naturaleza cambiante de las empresas a nivel mundial, en las relaciones entre ellas mismas, en la tecnología, en las estrategias para competir y en la cultura de las corporaciones, todo lo cual estaba impulsando a algunas empresas de determinados sectores a comprometerse con el programa de responsabilidad empresarial. Las corporaciones respondieron de diversas formas a esos apremios y condiciones, desde aparentar que cumplen, hasta mejorar más significativamente su desempeño social y ambiental. Pero persistió la preocupación de que aun cuando las corporaciones introdujeran lo que parecían ser reformas significativas en sus políticas y procedimientos relacionados con lo social y con el medio ambiente, generalmente no había habido un cambio fundamental en las pautas de producción y de consumo. Esta observación fue causa de que algunos participantes cuestionaran la posibilidad de que las EMs pudieran cambiar en realidad, dejando de ser parte del problema para ser parte de la solución a fin de lograr el desarrollo sostenible.

Surgió la preocupación entre los participantes de que las compañías puedan adoptar códigos y participar en los esquemas de certificación para evitar la amenaza de que se les apliquen formas de regulación más estrictas, y para desviar la atención del problema de criminalidad de las empresas así como de la necesidad de que haya leyes que permitan someterlas judicialmente por las violaciones cometidas. Se señaló también el hecho de que el interés creciente de las corporaciones en los códigos refleja la tendencia de muchas de las grandes empresas a reinventarse a sí mismas como “marcas registradas”, junto con el hecho de que la marca se haya convertido en uno de sus haberes principales. En este sentido, el “manejo de la reputación” se ha convertido en una preocupación clave de la administración. El número creciente de códigos de conducta y la participación de las

empresas en iniciativas tales como el Pacto Mundial,⁷ la Alianza Mundial para los Trabajadores y las Comunidades⁸ y la Iniciativa para el Comercio Ético (ETI, por sus siglas en inglés)⁹; necesitan ser vistos, en parte, en este contexto.

Limitaciones a la legislación

Mientras que varios de los participantes insistieron en la necesidad de que haya reglamentos obligatorios, otros les recordaron que en muchos de los países en desarrollo la capacidad de las instituciones estatales para aplicar la legislación es sumamente limitada. Los ministerios de trabajo, por ejemplo, a menudo disponen de pocos inspectores laborales y de medios escasos para realizar las inspecciones. Bajo esas circunstancias es importante que otros actores como los organismos intergubernamentales, las corporaciones y las organizaciones de la sociedad civil lleguen a involucrarse en dichas tareas a diversos niveles: internacional, nacional y local. Se indicó que la escasa capacidad normativa de los gobiernos es también un resultado de: (a) políticas neoliberales que modifican las prioridades de los ministerios de trabajo alejándolas de la protección laboral para acercarlas a la creación de empleo (aun si ello implica un deterioro de las normas laborales o una “carrera hacia el abismo”); y, (b) regímenes fiscales que reducen ingresos y gastos del gobierno. Algunos de los participantes insistieron en que en un contexto de ese tipo, las normas y la regulación internacional adquieren mayor importancia.

Aplicación endeble de códigos y sistemas de certificación

Varios de los participantes estuvieron de acuerdo con la observación que se hizo de que muchos de los códigos impulsados por las empresas y la industria eran sumamente endebles, en términos tanto de su contenido como de su aplicación. Varios participantes advirtieron los defectos de algunos tipos de esquemas de participación, tal como el ISO 14001,¹⁰ cuyo diseño fue influido fuertemente por los intereses de la industria. No obstante que en determinadas regiones del mundo muchas firmas empresariales han adquirido la certificación ISO 14001, no hay garantía de que con ello se reduzcan verdaderamente las repercusiones negativas para el medio ambiente. Esto se debe a que la certificación ISO 14001 no evalúa si una empresa ha mejorado o no en cuanto a ese tipo de repercusiones; por el contrario, se les otorga la certificación a las empresas que hayan puesto en orden

⁷ El **Pacto Mundial** es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas en la que se invita a las EMs y a las compañías que operan en los países en desarrollo a que se adhieran a un conjunto de nueve principios relacionados con derechos humanos, normas laborales y protección del medio ambiente.

⁸ La **Alianza Mundial** es una iniciativa de múltiples partes interesadas apoyada por el Banco Mundial y otras instituciones que tiene como finalidad ponderar las necesidades de los trabajadores en los países en desarrollo y exhortar a las EMs a que respondan a dichas necesidades.

⁹ La **Iniciativa para el Comercio Ético** es una iniciativa de múltiples partes interesadas con la que se establece un código básico de conducta relacionado con las normas laborales y se exhorta a que haya una constante vigilancia y auditoría con el fin de asegurarse de que las condiciones de trabajo de los empleados en las compañías que abastecen de bienes a los consumidores en el Reino Unido estén acordes o superen lo que estipulan las normas internacionales.

¹⁰ **ISO 14001** es un conjunto de pautas establecido por la *International Organization for Standardization* (Organización Internacional para Normalización) con el fin de mejorar el manejo del medio ambiente. Se le utiliza como una base para certificar si una empresa ha aplicado correctamente un sistema de manejo del medio ambiente.

determinados elementos de un sistema de manejo del medio ambiente, independientemente de sus repercusiones.

Se ha tratado de que ciertos sistemas recientes de certificación por parte de afectados con múltiples intereses relacionados con las normas laborales, como los que están ligados a la Asociación Trabajo Justo (FLA por sus siglas en inglés)¹¹ y SA 8000, sean más rigurosos e independientes de los intereses corporativos. Sin embargo, entre los participantes en el taller hubo alguna preocupación porque todavía se necesita fortalecer ciertas normas así como los sistemas de vigilancia y de verificación. Otros esquemas que implican una vigilancia independiente, como el de certificación forestal ligado al “Forest Stewardship Council” (FSC),¹² han mostrado ser muy efectivos, según algunos de los participantes. Uno de estos últimos, quien ha jugado un papel activo en el establecimiento del FSC, señaló varios puntos claves de dicho sistema. Primero, el sistema fue desarrollado en respuesta al fracaso de los intentos de “autorregulación” por parte de empresas e industria. Situación que ha sido confirmada por un estudio del Reino Unido sobre empresas que afirmaban estar abasteciéndose de productos e insumos provenientes de bosques manejados de manera sostenible. El estudio permitió encontrar que pocas empresas habían hecho declaraciones exactas. Segundo, la clave para promover normas más estrictas, siguiendo la cadena que va desde el bosque hasta la madera, era identificar alguna conexión estratégica por la que se pudiera ejercer presión sobre abastecedores y consumidores. Este eslabón estaba constituido por los grandes comerciantes al menudeo de productos de madera. Los intentos anteriores por parte de las ONGs para influir directamente en un gran número de aserraderos o consumidores de madera habían fracasado. Tercero, la razón principal de que esos detallistas respondieran positivamente era la presión conjunta que ejerció la sociedad civil. Cuarto, el sistema del FSC no debería verse como una alternativa a la normatividad gubernamental. Cuando se estableció, fue considerado en gran parte como un recurso provisional para compensar parcialmente la debilidad de la legislación correspondiente.

Varios de los ponentes insistieron en la marcada correlación que hay entre códigos y esquemas de certificación más efectivos y las presiones de una sociedad civil fuerte. Algunos participantes afirmaron que es importante distinguir entre las metas y programas del movimiento para que “las empresas rindan cuentas” (el cual abarca a actores de la sociedad civil que exigen cambios utilizando diversas tácticas), y la “responsabilidad de las empresas” promovida por los intereses de estas últimas. Se indicó también que no debería sobreestimarse el papel de las ONGs o de sus redes de interacción por sí solas. Cuando son efectivas, muchas veces se debe a sus vínculos con otros actores e instituciones, como los medios de comunicación. Sus enlaces con partidos políticos y con sindicatos también pueden ser importantes. Por lo tanto, cuando se identifica a las ONGs como actores claves en la promoción de la responsabilidad social de las empresas, debería recordarse que su efectividad depende a menudo de relaciones y alianzas con otros actores sociales.

¹¹ La **Asociación Trabajo Justo** (*Fair Labor Association*) es una organización con sede en los Estados Unidos de América que promueve la certificación de marcas para vestuario y calzado deportivo comercializados por las EMs. Promueve la adhesión a un código de conducta relacionado con las condiciones de trabajo y los procedimientos de vigilancia normales.

¹² El *Forest Stewardship Council* proporciona un sistema de etiquetación internacional que tiene como finalidad garantizar con certeza que los productos forestales provengan de bosques que estén bien manejados.

Varios participantes que tenían experiencia de primera mano sobre la inspección de las fábricas en países en desarrollo insistieron en la debilidad para aplicar los códigos. No obstante que los asociados y los proveedores de las empresas de mayor renombre frecuentemente exhiben sus códigos, algunas veces éstos están escritos en un idioma que los trabajadores no pueden entender. Los trabajadores desconocen frecuentemente cómo encauzar sus quejas, y el personal de la administración recibe poca si no es que ninguna capacitación para facilitar la implantación del código, ya sea en relación con el aprendizaje sobre los diferentes elementos del código o sobre los aspectos técnicos relacionados con las normas de seguridad, sanitarias y de protección al medio ambiente. Algunas EMs ignoran el principio de responsabilidad compartida para la aplicación del código, y fracasan al proporcionar a los abastecedores ayuda material para elevar sus normas laborales y ambientales. Dados sus márgenes de por sí tan reducidos, cumplir con los códigos podría significar para dichos abastecedores una carga económica inaceptable. Como resultado de ello, muchas empresas junto con los gobiernos locales y nacionales de los países del Tercer Mundo ven a los códigos de conducta como una amenaza al desarrollo. Es necesario que en las iniciativas internacionales o encabezadas por países del Norte para promover los códigos de conducta, se dé más atención a sus repercusiones en los países en desarrollo y a la cuestión de cómo ayudar a las empresas de los países del Sur en la implantación de tales códigos. Se proporcionaron ejemplos de iniciativas con las que se trata de lograr este último, como la Campaña Ropa Limpia (manufacturada y comercializada con justicia) (CCC, por sus siglas en inglés)¹³ y el Consorcio por los Derechos de los Trabajadores (WRC, por sus siglas en inglés).¹⁴

Vigilancia y verificación

Se expresaron serias preocupaciones en lo que se refiere a la falta de vigilancia a fondo, periódica e independiente sobre la aplicación de los códigos de conducta. Se necesita también que haya un reconocimiento mucho más amplio de la complejidad técnica y de los costos de la vigilancia. Esto a su vez, suscitó preguntas en relación con la factibilidad de los llamados de las ONGs y otras organizaciones para que haya una inspección independiente y amplia de los códigos de conducta. Algunos participantes advirtieron que las relaciones entre quienes ejercen la vigilancia y los gerentes de las fábricas locales son muchas veces antagónicas, siendo los administradores los que ven a los inspectores como una amenaza. Es necesario que haya más colaboración entre estos dos grupos.

La vigilancia, para que se cumpla con lo que prescribe un código, es una actividad sumamente compleja. Varios participantes criticaron el sistema de inspección y de verificación adoptado por algunas compañías y algunas ONGs. Mientras que en principio se considera deseable que haya una vigilancia independiente sobre el cumplimiento de los códigos, también es importante que las ONGs y otras organizaciones reconozcan las dificultades técnicas que ello implica. La verificación de las normas de salubridad, seguridad y medio ambiente requieren de bastante pericia, además de encontrar formas de

¹³ La **Campaña Ropa Limpia** (*Clean Clothes Campaign*) es una iniciativa proveniente de Europa (que abarca más de 200 organizaciones de la sociedad civil) cuyo objetivo es mejorar las condiciones de trabajo en las industrias del vestido y de ropa deportiva en todo el mundo, mediante la intercesión y la exhortación a las compañías para que se adhieran a un código modelo de conducta con el que se promueve vigilancia y verificación.

¹⁴ El **Consorcio para los Derechos de los Trabajadores** es una iniciativa proveniente de los Estados Unidos de América con la que se promueve la verificación independiente de las condiciones de trabajo en empresas que abastecen ropa deportiva a las universidades de dicho país.

acceso a los trabajadores y ganar su confianza. La capacidad de las ONGs para aumentar sus actividades de vigilancia es, aparentemente, muy limitada. En la práctica, las grandes firmas consultoras y contables están asumiendo esta función. Sin embargo, sus sistemas son a menudo defectuosos: los métodos que ellas adoptan pueden ser bastante superficiales, los servicios que proporcionan son caros, y pueden carecer de independencia en relación con las empresas que estén siendo vigiladas. Muchas veces, no se divulgan al público los resultados, socavando por lo tanto las posibilidades de utilizar la publicidad negativa para presionar a las empresas a fin de que mejoren sus procedimientos.

A pesar de esas dificultades, es claro que varias iniciativas de vigilancia y de verificación están evolucionando para poder atender algunas de las preocupaciones mencionadas. Por ejemplo, los sistemas de certificación relacionados con la Asociación Trabajo Justo (FLA) y con SA 8000, han incorporado varias de las preocupaciones de los sindicatos y han tratado de fortalecer los sistemas de verificación de las empresas del vestido. De modo semejante, el FSC ha cambiado, de una perspectiva más relacionada con el medio ambiente, hacia una en la que incorpora los intereses sociales y laborales.

El papel de los sindicatos

En relación con los derechos de los trabajadores y el papel de los sindicatos en la promoción de la responsabilidad social de las empresas, surgieron varias preocupaciones. Cuando los códigos de conducta no consideran problemas tales como el derecho a la negociación colectiva y la libertad de asociación, tal como sucede a menudo, puede que eso sea parte de una estrategia corporativa para debilitar el papel de los sindicatos en el lugar de trabajo. Han surgido suspicacias entre los sindicatos y algunas de las coaliciones internacionales por las iniciativas recientes de estas últimas relacionadas con los códigos y la certificación (como la FLA, SA 8000 y la ETI), dados los desacuerdos sobre definiciones y criterios con respecto al comportamiento adecuado de las empresas. Cuando se evalúan códigos y sistemas de certificación, es importante examinar no sólo el grado de atención que se dé a los intereses de los sindicatos, sino el hecho de que los sindicatos hayan participado activamente en el diseño e implementación de los propios códigos. ¿Las IVs promovidas por las empresas y las ONGs, complementan o fortalecen los esfuerzos de los sindicatos para mejorar las normas laborales, en vez de marginarlos?

Debido a la considerable atención internacional que se da a los códigos de conducta y a las asociaciones de las ONGs con las empresas de negocios, algunas veces se ha desviado la atención de otro instrumento que está siendo utilizado por el movimiento sindicalista internacional para promover la responsabilidad de las empresas, a saber, los Convenios Marco (Framework Agreements); acuerdos que son negociados entre determinadas corporaciones (Danone, Statoil, IKEA y Telefónica, por ejemplo), y los Secretariados de Sindicatos Internacionales (IUF*, ICEM** e IFBWW***, por ejemplo). Además, cubren las operaciones de las EMs en los países en desarrollo y significan un convenio negociado

* *International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations* (Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines). Nota del traductor.

** *International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions* (Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas). Nota del traductor.

*** *International Federation of Building and Wood Workers* (Federación Internacional de Trabajadores de la Construcción y de la Madera). Nota del traductor.

sobre derechos y deberes recíprocos que, en teoría, pueden ser vigilados por las estructuras sindicales. Otras instituciones que también son ignoradas a menudo en las discusiones sobre responsabilidad de las empresas, son los consejos regionales de trabajo, donde los representantes de los sindicatos relacionados con la misma EM pero de diferentes países, pueden reunirse para acceder a la información y consultar a los funcionarios de las empresas.

Aclaración de términos e iniciativas

Varios de los ponentes se refirieron al grado considerable de confusión que existe en el campo de la responsabilidad social de las empresas por lo que se refiere al vocabulario e instituciones nuevas que han surgido en años recientes. Por eso es necesario aclarar términos y conceptos: responsabilidad social de las empresas, ciudadanía corporativa, códigos de conducta, convenios marco, vigilancia, verificación, etiquetación social y otros más. Se requiere aclarar también el papel, objetivos y división del trabajo de las numerosas IVs internacionales y de las múltiples partes interesadas que existen actualmente para promover la responsabilidad de las empresas, tales como AA 1000,¹⁵ la CCC, la ETI, la FLA, la Iniciativa de Información Global (GRI, por sus siglas en inglés),¹⁶ los códigos de la OIT y de la OCDE, ISO 14001, SA 8000 y el WRC. Por lo que se refiere al concepto de responsabilidad social de las empresas, se destacó el hecho de que se tiende a definirlo de manera reducida en términos de normas específicas laborales y ambientales, y las relaciones de la empresa con la comunidad al nivel micro, esto es, la fábrica o la comunidad local. Lo que se ignora generalmente es el papel y la repercusión de las empresas al nivel macro, por ejemplo, en la forja de dos puntos importantes: (a) las pautas de producción y de consumo que pueden ser inherentemente irresponsables desde la perspectiva del desarrollo sostenible, o (b) las políticas de los gobiernos y las instituciones internacionales que pueden contribuir al deterioro social y ambiental. Se necesita que las corporaciones que afirman estar actuando de manera responsable, subrayen y pongan atención a ese tipo de contradicciones.

Las experiencias de los países en desarrollo

En las sesiones siguientes se analizó la experiencia en la promoción de responsabilidad social y ambiental de las empresas en algunos países en desarrollo específicos. En la presentación de los países se identificaron algunos de los actores y los principales elementos de presión con los que se promueve la responsabilidad social de las empresas, y se ponderaron sus repercusiones.

Indonesia

¹⁵ **AA 1000** es una norma de procedimiento establecida en 1999 por la organización *Accountability* (Rendición de cuentas) con sede en el Reino Unido. Su objetivo es promover una rendición de cuentas social y ética mediante la capacitación y el diálogo. Se exhorta a las empresas para que definan metas y objetivos, midan el avance logrado en el cumplimiento de esos objetivos, auditoría e informes sobre su comportamiento, y desarrollen mecanismos de retroalimentación.

¹⁶ Convocada por la Coalición para Economías Medioambientalmente Responsables, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la **Iniciativa de Información Global** tiene como objetivo mejorar la calidad de los informes económicos, sociales y del medio ambiente exhortando a las empresas a que se adhieran a su Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, establecida en 1999.

Melody Kemp señaló que en Indonesia, aun cuando conceptos tales como “responsabilidad social de las empresas” se hayan puesto más de moda, han sido promovidos esencialmente desde el exterior.¹⁷ No es de sorprender la falta relativa de interés que hay en este país cuando se toma en consideración el contexto actual de crisis económica, confusión política y privación social que han generado otras preocupaciones y prioridades. Se han dado pasos tentativos tanto por parte del gobierno como de varias EMs de los Estados Unidos de América y de Europa para mejorar su desempeño en cuanto a la protección del medio ambiente. Con iniciativas voluntarias dirigidas por el gobierno, en cuanto al control de la contaminación, se han tratado de motivar cambios citando, alabando o avergonzando a las empresas. Se han logrado algunos éxitos pero el activismo de los consumidores sigue siendo relativamente endeble, los recursos gubernamentales y de las empresas para iniciativas ambientales se han reducido por la crisis económica, y sólo una minoría de las empresas participantes ha adoptado medidas significativas para mejorar sus sistemas de manejo del medio ambiente. La participación de las empresas en los esquemas de certificación internacional como ISO 14001 sigue siendo escasa.

Los esfuerzos para promover la responsabilidad social y ambiental de las empresas han sido en gran parte confinados a unas cuantas EMs en las que han puesto la mira consumidores del Norte y activistas de las ONGs. Algunas de las peores corporaciones violadoras de derechos humanos, normas laborales y medio ambiente (como las cadenas de hoteles y las empresas tabacaleras), por lo general no han sido denunciadas por los grupos de la sociedad civil. Cuando las EMs han formulado normas para su desempeño social y ambiental, aparentemente, su ejemplo no se ha extendido de manera significativa a sus sucursales en otras naciones. La gran mayoría de las empresas y de los trabajadores de Indonesia permanecen ajenos a los esfuerzos para promover la responsabilidad social de las empresas. En general, los esfuerzos de las empresas para mejorar su calificación en cuanto a lo social y al medio ambiente han sido escasos y para guardar las apariencias. Esto refleja en gran parte el hecho de que las instituciones y los actores que en Occidente cuentan para que haya algún grado de progreso en relación con la responsabilidad social de las empresas, en Indonesia son muy débiles, destacándose sobre todo: el imperio de la ley, las ONGs, los sindicatos y los grupos de consumidores. En el contexto de la crisis económica y política nacional, y con instituciones endebles, es pertinente preguntarse si la responsabilidad social de las empresas es en realidad relevante para Indonesia a estas alturas de su situación.

Esta ponencia se refirió también a la efectividad de los procedimientos de implementación relacionados con los códigos de conducta. Dado el amplio conocimiento de la ponente en el campo de la salud y seguridad ocupacional y habiendo trabajado como inspectora independiente en la aplicación de uno de los códigos de conducta de las EMs, identificó lo que ella vio como algunas de las debilidades inherentes a los códigos y sistemas de vigilancia:

- pueden servir para colocar a las empresas fuera del sistema normativo nacional y eludir el sistema de negociación tripartita que es una de las principales reformas laborales de los últimos años;
- los procesos y los resultados de la vigilancia son, por lo general, confidenciales;

¹⁷ Para la versión revisada de esta ponencia en inglés, véase Melody Kemp: **Corporate Social Responsibility in Indonesia: Quixotic Dream or Confident Expectation?** (Responsabilidad social de las corporaciones en Indonesia: ¿Sueño quijotesco o expectativa confiable?), PP TBS 6, UNRISD, Ginebra, 2001.

- generalmente, los inspectores sólo revisan una o dos plantas modelo escogidas por el cliente;
- con frecuencia, las firmas de contabilidad, que carecen de conocimientos técnicos suficientes para entender los problemas de salud y seguridad en las plantas de producción (que a menudo son complejos), son las que llevan a cabo la inspección;
- las sanciones por no cumplir con las normas son leves o no existen;
- por lo general, las casas matrices son las que diseñan los códigos y rara vez en consulta con los sindicatos y los trabajadores;
- a menudo, los códigos con las especificidades técnicas menos significantes se encuentran en empresas dominadas por mujeres;
- los códigos se aplican a un porcentaje reducido de los trabajadores de una nación;
- frecuentemente, las empresas insisten en que sus afiliados y subcontratadores mejoren las condiciones de trabajo pero les proporcionan pocos recursos o ninguno para apoyar dicha mejora;
- a menudo, los trabajadores se sienten amedrentados por los inspectores y piensan que representan a la gerencia de las empresas; y
- los gerentes o los supervisores al nivel de fábrica responden muchas veces a las recomendaciones técnicas sin entender plenamente la índole del problema y sin participar en algún intento para solucionarlo.

Singapur y Malasia

Martin Perry presentó los resultados de un documento que escribió junto con Sanjeev Singh en el que examinan los esfuerzos para promover la responsabilidad social y ambiental de las empresas en Malasia y Singapur.¹⁸ Los resultados de una encuesta sobre las EMs aplicada por los autores en ambos países revelan que un número creciente de firmas afiliadas a las EMs están bajo presión de las empresas matrices con sede en países occidentales para que formulen sus normas medioambientales. Sin embargo, las medidas importantes para mejorar el desempeño de las empresas en cuanto a la protección del medio ambiente todavía se concentran en una pequeña proporción del total de las empresas y en sectores industriales específicos. El ponente explicó que en Singapur se ha logrado algún grado de aceptación de responsabilidad, pero que esto se debió tanto a la capacidad relativamente fuerte del gobierno para hacer que se cumpla la legislación, como a las iniciativas meramente voluntarias. Las IVs han sido parte de las estrategias de varias EMs que han tratado de generalizar el desempeño en torno al medio ambiente en todas sus organizaciones. Pero los bajos niveles de conciencia comunitaria sobre problemas del medio ambiente y una movilización endeble al respecto disminuyen los apremios sobre las empresas en Singapur para que adopten IVs que vayan más allá del cumplimiento legal de las normas mínimas. Aunque ese tipo de presiones sean más evidentes en Malasia, en este país la responsabilidad ambiental de las empresas se ha reducido a hacer que se cumpla levemente la ley. En ambos países, la certificación ambiental bajo la serie ISO 14001 se ha convertido en un indicador importante del compromiso voluntario de las empresas para mejorar el medio ambiente, pero su repercusión ha variado. En Singapur, donde el nivel de cumplimiento de la legislación ambiental ya es relativamente alto, no se ha exhortado para que haya una mayor actividad adicional. Sin embargo, en Malasia, a falta de recursos para asegurarse de que se cumplan las normas, la adopción de sistemas de manejo del medio

¹⁸ Para una versión revisada de este documento en inglés, véase Martin Perry y Sanjeev Singh: **Corporate Environmental Responsibility in Singapore and Malaysia: The Potential and Limits of Voluntary Initiatives** (Responsabilidad Empresarial Ambiental en Singapur y Malasia: El potencial y los límites de las iniciativas voluntarias), PP TBS 3, UNRISD, Ginebra, 2001.

ambiente ha permitido promover algunas mejoras. En conclusión, el ponente puso en tela de juicio algunos aspectos de la sabiduría convencional en lo que se refiere a la responsabilidad de las empresas y sus iniciativas voluntarias. Los escenarios conocidos como “ganar/ganar” donde los mejoramientos voluntarios pueden beneficiar tanto al medio ambiente como a la empresa con sus intentos para recortar los costos, son menos relevantes de lo que a menudo se afirma. Más aún, en la época actual la acción voluntaria de las empresas en torno al medio ambiente no puede ser considerada como un sustituto efectivo de la regulación gubernamental. Al contrario, el hecho de que algunas EMs se estén adhiriendo a normas de desempeño por encima de los requerimientos reguladores locales debería ser visto como una oportunidad para hacer más estricta la regulación.

México

En México, las presiones internacionales que promueven la responsabilidad social y ambiental de las empresas han sido un resultado del marco de referencia normativo relacionado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con la membresía de ese país en la OCDE. David Barkin explicó la manera como en los últimos años surgió un marco de referencia institucional de apoyo para que las empresas acepten su responsabilidad ambiental. Las políticas de las empresas para promover la conducta responsable en cuanto a la protección del medio ambiente han sido cada vez más importantes entre las EMs con sede en el extranjero. En general, dichas iniciativas no están inspiradas por intereses locales en México sino por las presiones de la competencia en otros países de la OCDE y por los directivos de las casas matrices. En general, esas iniciativas se extienden sólo a las empresas afiliadas a las EMs y no a sus abastecedores. Los avances en el campo de la responsabilidad social de las empresas han sido mucho menos notables.

En esta ponencia se insistió en las tendencias contradictorias relacionadas con las políticas del gobierno y los procedimientos de las empresas. El gobierno mexicano, por ejemplo, está respondiendo a las señales de una crisis medioambiental aumentando los recursos y el mandato de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero las políticas laborales están reduciendo la efectividad de las protecciones históricas y constitucionales. El salario real se ha reducido considerablemente y los comités de trabajadores, así como los de salud y de seguridad, previstos en la legislación laboral, han resultado inútiles. Estas tendencias reflejan tanto la adhesión del gobierno a las políticas neoliberales que promueven la liberalización de los mercados, como la decadencia del movimiento laboral. Mientras que un número creciente de corporaciones han adoptado el discurso de la responsabilidad ambiental, el panorama general continúa siendo desolador dadas las tendencias tales como la reubicación de las empresas hacia regiones semiáridas del país, frágiles en lo que respecta al medio ambiente, donde las normas son relativamente endebles, además del crecimiento de la inversión en sectores sumamente contaminantes de la actividad económica. Más aún, sectores como el turismo se han expandido rápidamente, pero con escaso interés por el medio ambiente y por el bienestar de las comunidades locales.

Filipinas

Este caso, presentado por Francisco Magno, revela que la responsabilidad social de las empresas no siempre es impulsada desde el exterior, ni depende del imperio de la ley ni es un campo de actividad reciente. En el decenio de los setenta, bajo la dictadura de Marcos, surgió un movimiento en pro de la responsabilidad de las empresas, encabezado por una alianza entre intereses empresariales y la iglesia católica a fin de promover un modelo de

desarrollo que no fuera ni socialmente polarizador ni socialista. Este movimiento adquirió mayor peso en el decenio de los noventa y se diversificó para poder abarcar los asuntos relacionados con la responsabilidad ambiental, en gran parte como respuesta a las presiones internacionales y al activismo de la sociedad civil en las Filipinas. Los avances en relación con la responsabilidad social y ambiental de las empresas han tenido lugar con el telón de fondo normativo de una legislación progresista, de reformas constitucionales y fiscales, y de la adhesión a determinados tratados internacionales. La mundialización y la orientación de la economía hacia una exportación creciente también han tenido efectos importantes, como se advierte, por ejemplo, en el número de empresas cada vez mayor que adquieren la certificación ISO 14001. La índole de la responsabilidad social de las empresas y las iniciativas voluntarias ha evolucionado con el tiempo reflejando diferentes presiones y circunstancias. Históricamente, se tendía a relacionar las IVs con la filantropía de las empresas. A principios del decenio de los noventa, la filantropía se concentraba principalmente en la educación, en proporcionar ayuda en situaciones de desastre y en proyectos de salud, siendo las organizaciones eclesíásticas, las escuelas y las ONGs las beneficiarias primordiales. Desde los años setenta (y con la formación de la ONG empresarial denominada Empresas Filipinas para el Progreso Social), la atención se ha concentrado también en los enfoques de desarrollo de la comunidad que promueven capacitación y “empoderamiento”. En los años noventa, la responsabilidad social y ambiental de las empresas, adoptó otra perspectiva relacionada con los cambios en la tecnología y en los sistemas de administración para mejorar su desempeño en la protección del medio ambiente. A pesar de estos desarrollos, la responsabilidad social y ambiental de las empresas, por lo general sigue siendo débil debido al compromiso limitado de muchas firmas, el escaso entorno normativo que hay en el país y la falta de atención a las tareas de auditoría y vigilancia.

Sudáfrica

David Fig examinó la relación entre responsabilidad ambiental de las empresas y el proceso de cambio social y político en Sudáfrica. A fin de distanciarse del régimen del *apartheid* y bajo la presión internacional, algunas de las grandes empresas de Sudáfrica trataron de mejorar su desempeño social en el decenio de los setenta. Más recientemente, las corporaciones han prestado alguna atención a los problemas del medio ambiente tanto por parte de compañías individuales como de las asociaciones industriales y empresariales. Gran parte del impulso que se da a estas iniciativas ha estado relacionado con los cambios en la elaboración de políticas ambientales, lo cual a su vez fue impulsado por el activismo de la sociedad civil.

No obstante que se ha negociado la formulación de nuevas políticas, el sector empresarial está consciente de que el gobierno sigue siendo débil en el ámbito de la regulación ambiental. Algunas empresas han emprendido varias iniciativas voluntarias, e instituciones tales como el *Industrial Environmental Forum of South Africa* (Foro sobre Medio Ambiente e Industria de Sudáfrica) junto con diversas asociaciones de la gran industria han promovido la ecoeficiencia y otros aspectos de la responsabilidad social y ambiental de las empresas. Pero muchas empresas siguen aprovechándose de la incapacidad gubernamental y el compromiso para aceptar responsabilidad ambiental ha sido bastante limitado. Las organizaciones del sector privado que promueven la responsabilidad ambiental de las empresas tienden a escoger senderos menos rigurosos y una legislación benevolente cuando participan en los foros sobre elaboración de políticas. Algunas corporaciones en particular, que a menudo son las más grandes y las que más contaminan, están tratando de limpiar su empañada imagen proporcionando donaciones financieras a

proyectos ambientales y elaborando informes sobre el medio ambiente, pero pocas de ellas se comprometen a reducir sistemáticamente los desperdicios, a adoptar tecnologías limpias y a remediar los daños causados al medio ambiente.

A menudo, es más bien la llamada de alerta de las ONGs y de las organizaciones sustentadas en la comunidad, la que apremia a las empresas para que entren en acción. La recesión económica inminente debilita más aún la respuesta de las empresas y reduce los recursos que asignan las compañías para el manejo del medio ambiente. Los diferentes tipos de presión a nivel internacional que promueven la responsabilidad social y ambiental de las empresas en algunos países en desarrollo, parecen más débiles en Sudáfrica, debido al volumen limitado de su producción destinada al mercado mundial.

¿Qué es lo que conduce hacia la responsabilidad de las empresas?

La presentación de los casos de países estudiados y los debates que se suscitaron a continuación revelaron que los factores que conducen hacia la aceptación de la responsabilidad social y ambiental por parte de las empresas en los países en desarrollo, tienden a ser muy diferentes de los de los países industrializados más ricos. En aquéllos, las presiones de la sociedad civil y los sindicatos, el activismo de los consumidores y la conciencia pública sobre el medio ambiente son a menudo menos relevantes. En cambio, el programa de responsabilidad de las empresas es impulsado en gran parte “desde afuera” y “desde arriba”. En algunos sectores, las casas matrices de las EMs, que en sus países de origen están sometidas a su vez a diversos tipos de presión por parte de las ONGs y de los consumidores, están imponiendo pautas y normas nuevas a sus afiliados y a sus abastecedores. En los países en desarrollo que fueron analizados en el taller, han surgido varias instituciones locales para promover la responsabilidad social de las empresas. Frecuentemente, dichas instituciones tienen vínculos muy fuertes con el sector corporativo. Sobre la conveniencia de tener ese tipo de vínculos las opiniones variaron. Aunque dichos vínculos puedan facilitar el acceso a niveles superiores de la administración y constituir una vía de influencia importante, pueden promover también una versión diluida de la responsabilidad de las empresas que implica pocos cambios fundamentales en sus prácticas usuales.

La preocupación por la característica de las IVs de provenir de arriba hacia abajo, hizo que varios participantes insistieran en lo que ellos consideraron que eran varios aspectos frecuentemente ignorados en los debates sobre los códigos de conducta y la vigilancia, a saber: la importancia de la educación, la capacitación, la participación y el diálogo. Por ejemplo, se necesita que los supervisores de las fábricas se involucren en la identificación de los problemas y las soluciones, en consulta con los trabajadores. Las compañías deberían asignar suficientes recursos para entrenar al personal y desarrollar una capacidad interna para ejercer la vigilancia, en vez de apoyarse en las visitas ocasionales de inspectores foráneos. Empresas y sindicatos necesitan proporcionar “educación acerca de los riesgos” a los trabajadores y a los gerentes, a fin de desarrollar una cultura de la seguridad. Se requiere desarrollar también sistemas de certificación y de vigilancia a bajo costo. Estos tipos de sistemas deberían apoyarse, mucho más en el conocimiento y la pericia local, de lo que suelen hacerlo en la actualidad.

En los documentos y discusiones sobre los estudios de caso de los países analizados se advirtió también que diferentes pautas de desarrollo industrial y de cambio e integración social en la economía mundial han generado resultados diferentes por lo que se refiere a la responsabilidad social y ambiental de las empresas. Las fuerzas y los actores que promueven este tipo de responsabilidad varían según los diferentes contextos nacionales, por lo que es importante investigar el papel de las diferentes partes interesadas, así como los tipos de instituciones, presiones e incentivos que pudieran promover la responsabilidad social y ambiental de las empresas en los países en desarrollo. En varias economías del Sudeste de Asia, por ejemplo, donde la orientación hacia la exportación es una característica clave, algunas de las empresas afiliadas y proveedores de las EMs fueron presionadas para que cumplieran normas más estrictas. En México, la integración económica con los Estados Unidos de América permitió establecer algunas normas y regulaciones nuevas para el manejo del medio ambiente. En Sudáfrica y en las Filipinas las regulaciones gubernamentales, las presiones sociales de los sindicatos o de las ONGs, así como la motivación de las empresas de autorretratarse como “ciudadanos corporativos” en el nuevo contexto de la democracia, también constituyeron impulsos importantes. En una investigación futura se requiere aclarar no solamente la importancia y la influencia relativas de los diversos factores que promueven el cambio, sino también la forma como varían el ritmo y solidez de la responsabilidad social y ambiental de las empresas, dependiendo de qué tipo de impulso sea lo más relevante.

Algunos de los ponentes destacaron la importancia de la organización política, el activismo, la intercesión, el cabildeo y las alianzas como elementos claves en la promoción de la responsabilidad de las empresas y pusieron en tela de juicio varios supuestos comunes. De acuerdo con uno de los ponentes, no son los “consumidores individuales” sino el “activismo del consumidor” lo que obliga a las empresas a cumplir con su programa de responsabilidad empresarial. Otros participantes señalaron que las ONGs o las redes de trabajo de las ONGs constituyen actores claves en la promoción de la responsabilidad de las empresas pero, en sí mismas, sólo logran repercutir de manera limitada. Son más eficaces cuando trabajan con otras instituciones como los medios de comunicación o los partidos políticos o en alianza con los sindicatos.

Varios participantes insistieron en la necesidad de evitar hacer generalizaciones amplias sobre los efectos positivos o negativos de las IVs. Su efectividad varía considerablemente dependiendo del contexto regulador del cual surgen, de los tipos de partes interesadas y de las motivaciones de las empresas. En los debates que siguieron a las presentaciones de los estudios de caso por países, se identificaron varias tensiones claves que caracterizan el programa de responsabilidad de las empresas.

¿Un “entorno incapacitante”?

En tanto que por un lado existen determinados factores que impulsan a algunas empresas a atender asuntos sociales, laborales y del medio ambiente; por otro lado también hay numerosas restricciones a un avance significativo. Tal como lo advirtieron varios de los ponentes, el aspecto preocupante es que dichas restricciones no pueden ser superadas fácilmente puesto que se trata de características claves del sistema capitalista o de la política neoliberal. Por ejemplo:

- Los sistemas de producción a destajo o que se basan en el logro de una meta fija y que se utilizan con suma frecuencia, socavan los intentos de mejorar la salud y seguridad de los

trabajadores, dado que se pueden realizar determinadas labores con mayor rapidez sin usar utensilios protectores como guantes o mascarillas.

- Las políticas monetarias que generan elevadas tasas de interés en los países en desarrollo pueden restringir la inversión de las corporaciones en infraestructura, en tecnología y en la capacitación relacionada con la responsabilidad social y ambiental.
- En algunos países, las políticas para promover la inversión extranjera directa y una reducción de los ingresos y gastos estatales, han causado una reducción de las normas laborales y de la capacidad del estado para proteger e inspeccionar las condiciones de trabajo, lo cual a su vez reduce la responsabilidad social de las empresas.
- Las tendencias actuales vinculadas a la subcontratación y a la “flexibilización” de los mercados laborales están generando una doble normatividad. Por un lado, algunas EMs aseguran que están mejorando las normas laborales y ambientales en sus operaciones fundamentales; por otro lado, el hecho de que dependen cada vez más de la subcontratación para realizar diversas actividades, en realidad está reduciendo las normas laborales y ambientales.

El traslado de las industrias contaminantes de los países del Norte hacia los del Sur, especialmente obvio en el caso de las empresas de los Estados Unidos de América que se han aprovechado de la integración económica con México, constituye otra tendencia contradictoria. Ese tipo de empresas pueden afirmar que tienen sistemas de manejo del medio ambiente que constituyen una mejora relativa en comparación con las que existían previamente en el país anfitrión, pero los cambios en la ubicación de las industrias pueden implicar un deterioro general de las normas ambientales para la empresa en cuestión.

¿Es relevante para los países del Sur la responsabilidad de las empresas?

Un problema importante que se advirtió en los debates llevados a cabo en el seminario, fue que el programa de responsabilidad de las empresas ha sido definido en gran parte por los intereses y los actores de los países del Norte, y no se ha logrado enfocar la atención a los intereses claves de los países del Sur en relación con el desarrollo. Esto es lo que se constató de diversas maneras.

Primero, los costos de la responsabilidad de las empresas no deberían constituir una carga excesiva para las empresas débiles de los países en desarrollo que abastecen o compiten con las EMs. Se requiere que dichos costos sean compartidos y en realidad, asumidos en gran parte por las EMs y los consumidores de los países del Norte.

Segundo, la responsabilidad de las empresas no debería convertirse en una herramienta proteccionista que discrimine a empresas o países del Sur.

Tercero, muchos países en desarrollo tienen otros intereses prioritarios y necesitan hacer que funcionen las instituciones básicas, tales como el imperio de la ley, la libertad de prensa, y las organizaciones democráticas y de la sociedad civil, incluidos los sindicatos libres. Sólo cuando ese tipo de instituciones exista podrá haber un avance significativo en cuanto a la responsabilidad de las empresas. Insistir en que se cumpla el programa de

responsabilidad de las empresas sin contar con ese tipo de instituciones es, según el punto de vista de algunos participantes, lo mismo que poner la carreta delante de los bueyes.

Cuarto, existe el peligro de que por la atención considerable que se dé a temas tales como la responsabilidad de las empresas, las EMs y sus cadenas de abastecimiento; se ignoren preocupaciones de orden laboral, ambiental y de la comunidad mucho más urgentes, relacionadas con las condiciones de las pequeñas y medianas empresas y del sector informal. Más aún, se tiende a enfocar la atención sólo sobre unas cuantas empresas y sectores (tales como el sector del vestido, de la ropa deportiva, el de juguetería y el de minería), y a menudo se ignoran las actividades de las empresas en otros sectores donde las condiciones laborales y ambientales pueden ser peores.

Varios participantes insistieron en la necesidad de mejorar el diálogo entre los actores del Norte y los del Sur sobre los problemas de responsabilidad social y ambiental de las empresas. La tendencia es que sean las organizaciones y los grupos de países del Norte los que estén impulsando el programa de responsabilidad de las empresas. Es preciso cambiar esta situación si se quiere ampliar el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y que sea más relevante para los países en desarrollo.

Acrónimos

CCC	Clean Clothes Campaign (Campaña Ropa Limpia)
EM	Empresa Multinacional
ETI	Ethical Trading Initiative (Iniciativa para el Comercio Ético)
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FLA	Fair Labor Association (Asociación Trabajo Justo)
FSC	Forest Stewardship Council (Consejo para Salvaguarda de los Bosques)
GRI	Global Reporting Initiative (Iniciativa de Información Global)
ICEM	International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Union (Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas)
IFBWW	International Federation of Building and Wood Workers (Federación Internacional de Trabajadores de la Construcción y de la Madera)
ISO	International Organization for Standardization (Organización Internacional para Normalización)
IUF	International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association (Unión Internacional de Asociaciones de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)
IV	Iniciativa Voluntaria
OCDE	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización no gubernamental
UNRISD	Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social
WRC	Workers Rights Consortium (Consortio para los Derechos de los Trabajadores)

Programa

Lunes 23 de octubre de 2000

9:00-9:30 Apertura

Sesión I

9:30-10:30 Regulación de las grandes firmas internacionales
Presentación a cargo de E.V.K. FitzGerald
Media hora de debate general

10:30-11:00 Pausa

11:00-12:00 Códigos internacionales y certificación
Presentación a cargo de Leah Margulis
Media hora de debate general

12:00-13:00 Códigos de conducta de las empresas
Presentación a cargo de Rhys Jenkins
Media hora de debate general

13:00-14:30 Comida

Sesión II

14:30-15:30 Responsabilidad social de las empresas en Indonesia
Presentación a cargo de Melody Kemp
Media hora de debate general

15:30-16:00 Pausa

16:00-17:00 Responsabilidad ambiental de las empresas en Singapur y Malasia
Presentación a cargo de Martin Perry
Media hora de debate general

Martes 24 de octubre de 2000***Sesión III***

9:00-9:30 Futura investigación de UNRISD

9:30-10:30 Responsabilidad social y ambiental de las empresas en México

Presentación a cargo de David Barkin

Media hora de debate

10:30-11:00 Pausa

11:00-12:00 Responsabilidad social y ambiental de las empresas en las Filipinas

Presentación a cargo de Francisco Magno

Media hora de debate

12:00-13:00 Responsabilidad social y ambiental de las empresas en Sudáfrica

Presentación a cargo de David Fig

Media hora de debate

13:00-14:30 Comida

14:30-17:30 Estudios de caso por países: Temas a tratar e investigación futura

Participantes

Renato ALVA PINO

Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD),
Suiza

David BARKIN

Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco
México

Anna BIONDI BIRD

Confederación Internacional de Sindicatos Libres,
Suiza

Lara CATALDI

La Declaración de Berna, Suiza

Andrew CLAPHAM

Instituto de Estudios Superiores Internacionales,
Suiza

Michel EGGER

Pan para Todos, Suiza

David FIG

Departamento de Sociología de la
Universidad del Witwatersrand, Sudáfrica

E.V.K. FITZGERALD

Centro de Investigación sobre Política Financiera y Comercial,
Universidad de Oxford, Reino Unido

Stephanie HANFORD

Consejo Empresarial Mundial pro Desarrollo Sostenible,
Suiza

Jean-Paul JEANRENAUD

Programa Bosques para la Vida, WWF Internacional, Suiza

Hamish JENKINS

Servicio de Vinculación No Gubernamental de las Naciones Unidas, Suiza

Rhys JENKINS

Escuela de Estudios de Desarrollo de la
Universidad de East Anglia, Reino Unido

Scott JERBI

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Suiza

Melody KEMP
Consultora independiente

Bertrand LAMON
Instituto de Estudios Superiores Internacionales,
Suiza

Francisco MAGNO
Centro de Investigación sobre Desarrollo Social de la
Universidad La Salle, Filipinas

Leah MARGULIES
Consultora independiente

Sandrine MONBARON
Centro Europa-Tercer Mundo, Suiza

Kara NILES
Relaciones de las Corporaciones con el Medio Ambiente,
WWF Internacional, Suiza

András NOVEMBER
Instituto de Estudios Superiores sobre Desarrollo,
Suiza

Ludger ODENTHAL
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Suiza

Martin PERRY
Departamento de Geografía de la
Universidad Nacional de Singapur

Phillipe REGNIER
Instituto de Estudios Superiores sobre Desarrollo,
Suiza

Judith RICHTER
Consultora independiente

Martin ROBRA
Consejo Mundial de Iglesias, Suiza

Michael D. URMINSKY
Organización Internacional del Trabajo, Suiza

Peter UTTING
Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD),
Suiza

Auret VAN HEERDEN
Organización Internacional del Trabajo, Suiza

Lin WANG
Organización Internacional del Trabajo, Suiza

Jolanda VAN WESTERING
Servicio de Vinculación No Gubernamental de las Naciones Unidas, Suiza

Brent WILTON
Organización Internacional de Empleadores, Suiza



El Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) es un organismo autónomo que se encarga de hacer investigación multidisciplinaria sobre las dimensiones sociales de los problemas contemporáneos que afectan al desarrollo. Su labor está dirigida por la convicción de que para formular políticas de desarrollo efectivas, es crucial comprender el contexto social y político. El Instituto trata de proporcionar a los gobiernos, agencias de desarrollo, organizaciones de base y académicos un mejor entendimiento sobre la forma como las políticas de desarrollo y los procesos de cambio económico, social y del medio ambiente afectan a diferentes grupos sociales. Trabajando con una extensa red de colaboración de centros de investigación nacionales, UNRISD tiene como meta promover estudios originales y fortalecer la capacidad de investigación de los países en desarrollo.

Los programas de investigación actuales son los siguientes: Sociedad civil y movimientos sociales; Democracia, gestión de buen gobierno y derechos humanos; Identidades, conflicto y cohesión; Política social y desarrollo; y, Tecnología, empresa y sociedad.

Para obtener una lista de las publicaciones de UNRISD gratuitas y en venta favor de dirigirse al Centro de Información de UNRISD, Palais des Nations, 1211 Ginebra 10, Suiza. Tel.: (41 22) 9173020; Fax: (41 22) 9170650; info@unrisd.org; www.unrisd.org

UNRISD agradece a la Fundación MacArthur el apoyo financiero que le otorgó para la realización de este seminario; y agradece también el apoyo para su financiamiento principal otorgado por los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, México, Noruega, Suecia, Suiza, el Reino de los Países Bajos y el Reino Unido.

Este informe fue elaborado por Peter Utting (utting@unrisd.org), coordinador del proyecto de UNRISD sobre Responsabilidad empresarial para el desarrollo sustentable.

Copyright © United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).

Este documento es la traducción al español de la publicación de UNRISD *Promoting Socially Responsible Business in Developing Countries: The Potential and Limits of Voluntary Initiatives* (Conference News, UNRISD/CN/02/1, January 2002). La versión en español no es una publicación formal de UNRISD.